

Comunidades y funcionarios redibujan los límites que Barrick Gold pretendió borrar

Barrick Gold el jueves recién pasado entregó los resultados del segundo cuarto del 2012. Junto con anunciar una baja en los números trimestrales de la empresa (35% de sus ganancias), aportó novedades sobre uno de sus proyectos estrella en el mundo, Pascua Lama que se encuentra en la frontera entre Chile y Argentina. Lejos de dar detalles sobre la puesta en marcha pronosticada por última vez para mediados de 2013, anunció un nuevo aplazamiento de un año y reveló un exorbitante aumento de la inversión, de entre un 50 a un 60% por sobre la última estimación, esto significa subir hasta US\$ 3.000 millones adicionales para llegar al extraordinario valor total de unos US\$ 8.000 millones, lo que contrasta severamente con los US\$ 950 millones que costaba el proyecto cuando fue presentado en 2001.

La agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's dio cuenta de una "perspectiva negativa" para la empresa, lo que implicó una baja en el raiting debido principalmente a los "riesgos de ejecución con Pascua Lama". Barrick insiste que todo esto se debe a la inflación y la baja productividad, pero sus explicaciones no convencen. Los acontecimientos en la empresa han generado molestia en los accionistas, movimientos al interior de la empresa -como el despido del CEO Aaron Regent-, agilización de gestiones entre las autoridades promineras, y fortalecimiento de las comunidades que por más de 10 años han insistido en la inviabilidad del proyecto.

Pascua Lama, el primer proyecto minero binacional del planeta, ubicado en el límite chileno argentino de la Cordillera de los Andes, en la provincia de San Juan del lado argentino y en lo alto de la cuenca del Valle del Huasco, región de Atacama por el lado chileno, viene hace años experimentando reveses propios de una iniciativa mal planificada e impuesta a la fuerza. Este año las adversidades han aumentado, generando incertidumbre y cuestionamientos sobre la ejecución del proyecto.

En el 2010, Barrick solicitó préstamos de las agencias de financiamiento público de Canadá (Export Development Canada) y Estados Unidos (Export-Import Bank). Las comunidades informaron a las agencias sobre el modo de operar de la empresa en los territorios y a comienzos de este año se logró que Barrick Gold renunciara a los créditos -y al respaldo institucional y político que ellos traen consigo-. A todas luces, las evidencias aportadas hubieran significado el rechazo de los dineros, y con ello, una nefasta señal a los accionistas.

A esto se sumó la anulación por la Corte Suprema argentina de la medida cautelar pedida por la empresa, sindicatos y gobierno provincial, en la provincia de San Juan para eximir al territorio de la aplicabilidad de la Ley de Glaciares promulgada en 2010. La legislación busca proteger a los glaciares y prohíbe la actividad minera sobre o alrededor de ellos, cuestión relevante si se considera que autoridades chilenas ya multaron a la empresa por no cumplir con la Resolución de Calificación Ambiental en lo relativo a la protección de los glaciares en la zona fronteriza. Es más, recientes visitas fiscalizadoras de regantes y dirigentes comunitarios arrojaron fotos del glaciar Toro 1 que se encuentra prácticamente extinguido.

A esto hay que añadir una inesperada dificultad administrativa de muy difícil solución. Luego de 17 años de vigencia, Argentina no renovó el Tratado Binacional de doble tributación, que constituía el marco bajo el cual después de más de tres años de conversaciones entre funcionarios y técnicos de Chile y Argentina, se concretó aceleradamente un acuerdo tributario especial para Pascua Lama. Este cierre negociador se realizó en 2009, luego de la visita de Aaron Regent a Michelle Bachelet y

de Peter Munk a Cristina Fernández, y supuso la renuncia de los funcionarios argentinos que consideraron el acuerdo atentatorio a la patria. El acuerdo tributario para Pascua Lama hace referencia al tratado internacional y por lo tanto, la expiración del último pone en cuestión la aplicabilidad del anterior.

Además, en lo que va del año, ya han muerto tres operarios de la empresa, que se suman a las 16 víctimas documentadas por el lado chileno y a una cifra aún no determinada del lado argentino, esto, producto de las peligrosas condiciones que implica trabajar a más de 4.500 metros de altura, lo que ya ha puesto en alerta a los trabajadores y sub contratistas y comienzan las presiones para que se promulguen leyes que resguarden la seguridad laboral en el trabajo en altura a ambos lados de la frontera.

Todo esto ocurre antes de que el proyecto entre en operaciones y ya pesan sobre él irregularidades probadas; multas de la autoridad ambiental de la región de Atacama, la recepción de una queja que concierne el proyecto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, modificaciones significativas al proyecto original, disminución hasta en un 70% de los glaciares constatado por la propia Dirección General de Aguas, cambio de trazado de los caminos de acceso ya que las comunidades exigieron que los camiones no pasaran por sus localidades. Todos estos asuntos indudablemente aumentan los costos, merman la confianza y cuestionan las expectativas iniciales que había generado Pascua Lama en la población.

De hecho, las dificultades propias de pretender llevar a cabo una actividad económica altamente contaminante en una zona fronteriza, con todos los problemas administrativos, sociales y ambientales que esto acarrea, no fueron debidamente calculadas. Para la empresa bastaba con que a espaldas de la ciudadanía la administración de Eduardo Frei y Carlos Menem suscribieran un Tratado Bi-nacional minero que posibilitaba el desarrollo de la actividad minera en la antes intocable frontera.

Sin embargo, queda demostrado que la voluntad comunitaria y de funcionarios que sí responden al interés público, puede subvertir la arbitrariedad de las autoridades y eso indudablemente, aunque el nuevo CEO Jaime Sokalsky no lo diga, incorpora dosis de inestabilidad, aumentos de costos, aplazamientos, postergación de otras inversiones como Cerro Casale, y en definitiva, empoderamiento de una comunidad que cada vez ve más posible reposicionar los límites que salvaguardaban su forma de vida.

Contactos:

Karyn Keenan - Halifax Initiative Coalition: kkeenan@halifaxinitiative.org

Jennifer Moore - MiningWatch Canada: jen@miningwatch.ca

Lucio Cuenca – OLCA: l.cuenca@olca.cl

Ottawa - Santiago, 3 de Agosto de 2012